



MAT: Iniciativa de norma constitucional  
intitulada *"Para que Nunca Más, no más  
impunidad, no al negacionismo"*



Santiago, 28 de enero de 2022

**A : Dra. Da. MARÍA ELISA QUINTEROS CÁCERES**  
**SEÑORA PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL**

**DE : CONVENCIONALES FIRMANTES**

De nuestra consideración:

Señora Presidenta, reciba nuestros más sinceros y atentos saludos de parte de quienes suscribimos esta presentación.

Junto con saludarle, en razón de lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes del Reglamento General de la Convención Constitucional, mediante el presente oficio, presentamos la iniciativa de norma constitucional que lleva por título *"Para que Nunca Más, no más impunidad, no al negacionismo"*, construida por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y que busca reconocer y garantizar como derechos fundamentales, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a que se garantice la no reiteración de hechos que constituyan graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

La presente propuesta de norma constitucional se basa en los antecedentes y fundamentos que se describen a continuación y agradecemos sea distribuida a la **Comisión 6: SISTEMA DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL:**

## **I.- Antecedentes**

1.- La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP reúne desde el año 1976, a familiares de víctimas asesinadas por agentes del Estado, durante la dictadura civil-militar que imperó en el país en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Conformada como Organización No Gubernamental desde el año 1996, la AFEP ha participado activamente en los procesos de verdad y justicia por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la época referida.

En el marco de esta imprescindible lucha tanto para los familiares de las víctimas como la sociedad toda, la AFEP ha presentado, a partir del año 2010, más de 1.250 querellas por casos de ejecuciones políticas que, no obstante haber sido reconocidas como violaciones a los derechos humanos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y de la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, no habían sido a la fecha objeto de investigación judicial alguna, o bien, las investigaciones judiciales instruidas en su momento para esclarecer los hechos, habían resultado manifiestamente insuficientes, en razón de la falta de imparcialidad, objetividad, seriedad y profundidad con la cual fueron desarrolladas.

2.- En nuestro país, durante la dictadura civil-militar que imperó desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, se cometieron reiterados crímenes de lesa humanidad; sin embargo, en el tránsito hacia un régimen democrático, existió una resistencia de los poderes públicos y, en particular, del Poder Judicial para investigar y sancionar los delitos referidos, lo cual, finalmente, fue posible gracias a la presión y esfuerzo principalmente de las organizaciones de derechos humanos, los familiares de miles de víctimas y, asimismo, a las víctimas sobrevivientes. Estas personas, actuando individualmente y de manera colectiva organizada en agrupaciones, pudieron remover los obstáculos que fomentaban y concretaban la impunidad imperante en aquel entonces.

En este contexto, la normativa constitucional propuesta tiene como esencial finalidad, reconocer y garantizar, como derechos fundamentales, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a que se garantice la no reiteración de hechos que constituyan graves, masivas y sistemáticas violaciones a los



## II.- Fundamentos

El reconocimiento y la eficacia de ciertos derechos como los ya referidos, a saber: derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de los cuales son titulares las personas, y para este caso en particular, las personas afectadas por violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, no pueden depender del gobierno de turno ni del respectivo juez o ministro a cargo del conocimiento y resolución de una causa relativa a violaciones a los derechos humanos caracterizadas -como lo podría ser, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad-. De ahí nace la relevancia de su consagración constitucional, pudiendo citar, como ejemplo, la imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles dirigidas a perseguir, respectivamente, la responsabilidad individual de las personas naturales que intervinieron en la comisión de estas particulares violaciones a los derechos humanos, y la responsabilidad estatal que materialice la reparación pecuniaria de las personas afectadas.

Supone, asimismo, una definición constitucional que disponga de manera meridiana, ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad, disponiendo la obligación del Estado de Chile en la cooperación con terceros Estados y con organizaciones internacionales jurisdiccionales en materia de ayuda, información, extradición y activación de los principios de jurisdicción universal.

Los argumentos que respaldan esta propuesta son los hechos históricos, dado que durante los años noventa y comienzos del dos mil, los tribunales de justicia fueron reticentes para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil-militar que nos afectó en el pasado reciente, y pese a que a la fecha, muchas de dichas dificultades han sido enmendadas, esto solo fue posible gracias a la lucha ineludible y permanente que, día a día, dieron y dan los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas y, asimismo, las víctimas sobrevivientes, junto a diversas organizaciones y activistas de Derechos Humanos.

El esfuerzo de las personas referidas logró revertir los resultados de numerosos casos por crímenes ocurridos durante la dictadura civil-militar; sin embargo, tal esfuerzo demostró no ser suficiente para generar un cambio en la institución, lo que resulta palpable en las tristes estadísticas de las investigaciones y procesos llevados a cabo por el Ministerio Público y el Poder Judicial, a propósito del fenómeno denominado “estallido social” o “revuelta social”, acaecido a partir del 18 de octubre de 2019.

### **III.- INICIATIVA CONSTITUYENTE:**

Por los antecedentes y fundamentos antes expuestos, mediante este acto, las y los convencionales constituyentes que suscribimos esta presentación, proponemos la siguiente norma constitucional:

#### ***Artículo x: Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición***

*“La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran.*

*Dentro de este derecho existe el deber por parte del Estado, de perseguir las violaciones referidas cuando ocurran, asegurando la incoación de investigaciones oportunas, eficaces y rigurosas; asegurándose, asimismo, la proporcionalidad de las sanciones que se impongan a los responsables de aquéllas, no pudiendo proceder respecto de éstos últimos ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad.*

*Además, las acciones penales y civiles que emanan tendrán el carácter de imprescriptibles y la responsabilidad no podrá ser objeto de amnistía, prohibiéndose el uso de la justicia militar para su investigación y sanción, debiendo ser conocida por una juez natural y establecido previamente por ley. Las víctimas directas e indirectas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos tendrán el derecho de participar en todas las instancias que se generen.*

#### ***Artículo x : De las obligaciones del Estado de Chile, respecto de las graves violaciones a los DD.HH***

*El Estado de Chile estará obligado a tipificar conductas constitutivas de graves*

*violaciones a los derechos humanos como delitos en el ordenamiento jurídico interno y a proveer activamente información y establecer y respetar el derecho al habeas data.*

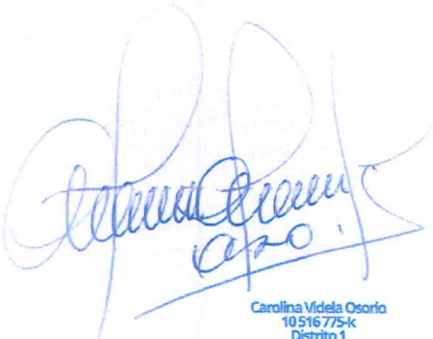
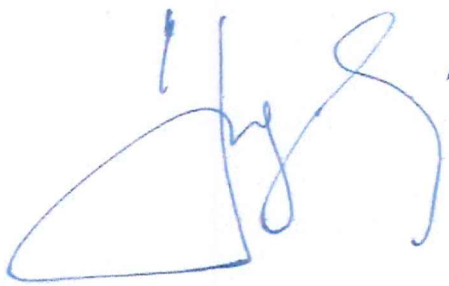


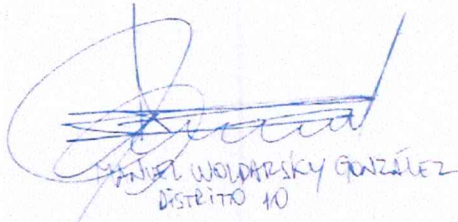
*También, el Estado de Chile deberá cooperar con terceros Estados y con organizaciones internacionales jurisdiccionales en materia de ayuda, información, extradición y activación de los principios de jurisdicción universal.*




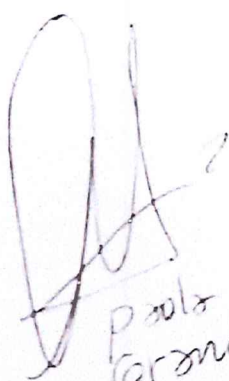
***Artículo X: De las inhabilidades para responsables de delitos de lesa humanidad***

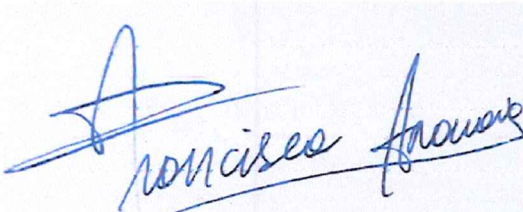




*Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley”.*



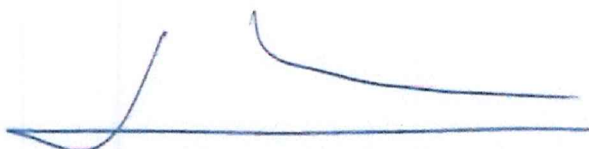
**Convencionales Constituyentes firmantes**

1	<b>Carolina Videla Osorio</b> <b>Convencional</b> <b>Constituyente D-1</b>	 <small>Carolina Videla Osorio 10516775-K Distrito 1</small>
2	<b>Hugo Gutiérrez Gálvez</b> <b>Convencional</b> <b>Constituyente D-2</b>	
3	<b>Hernán Velásquez Núñez</b> <b>Convencional</b> <b>Constituyente D-3</b>	 <small>Hernán Velásquez N.</small>
4	<b>Bessy Gallardo Prado</b> <b>Convencional</b> <b>Constituyente D-8</b>	
5	<b>Manuel Mauricio Woldarsky González</b> <b>Convencional</b> <b>Constituyente D-10</b>	 <small>MANUEL WOLDARSKY GONZÁLEZ DISTRITO 10</small>

6	Giovana Roa Cadin Convencional Constituyente D-10	
7	Marcos Barraza Gómez Convencional Constituyente D-13	 Marcos Barraza G
8	Nicolás Núñez Gangas Convencional Constituyente D-16	 NICOLAS NUNEZ GANGAS 16.621.552-8
9	Paola Grandón González Convencional Constituyente D-17	 Paola Grandón 13.475.059-6

10	Francisca Arauna Urrutia Convencional Constituyente D-18	 17.7A.490 - 4. Francisca Arauna Urrutia, D18.
11	Andrés Cruz Carrasco Convencional Constituyente D-20	 
12	Yarela Gómez Sánchez Convencional Constituyente D-27	
13	Ericka Portilla Barrios Convencional Constituyente D-4	



14	<b>Roberto Celedón Fernández Convencional Constituyente D-17</b>	
15	<b>Manuela Royo Letelier Convencional Constituyente D- 23</b>	